



HERALDO

LA FIRMA

| Pilar de la Vega

Una radiografía de la desigualdad

La exclusión social de las generaciones más jóvenes no ha dejado de crecer en casi dos décadas. Es necesario consenso político, pues se requieren políticas de país, no de legislatura. La evidencia demuestra que cuando hay políticas sostenidas, hay resultados

Vivimos tiempos difíciles para la reflexión, porque las noticias se agolpan y hasta cierto punto se contradicen. La semana pasada leí la noticia de que el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, se reunió con el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, con el objetivo de trasladarle las principales conclusiones del IX Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, realizado por un equipo de 140 investigadores pertenecientes a 51 universidades, centros de estudios y fundaciones. Me pareció importante, pues hoy es más necesario que nunca intentar escapar de tanta exposición declarativa e intentar analizar cómo estamos y hacia dónde vamos.

El Informe afirma que España atraviesa un momento decisivo. Tras décadas de cambios acelerados que han reconfigurado su mapa social, económico y territorial,

el país se enfrenta a una encrucijada que marcará su presente y las oportunidades de las próximas décadas. A pesar de que en los últimos años los indicadores macroeconómicos apuntan a recuperación y crecimiento, se sigue necesitando atajar las principales causas de la exclusión social en España, que afecta a 9,4 millones de personas, especialmente a la infancia y la juventud.

«Reforzar el consenso en defensa del Estado de bienestar y de las políticas públicas contra la desigualdad es la mejor forma de defender la estabilidad de la propia democracia»

Ambos colectivos son los eslabones más débiles del actual modelo socioeconómico. El 29 % de la niñez en España se encuentra en exclusión, mientras que 2,5 millones de jóvenes viven atrapados en la precariedad estructural, con temporalidad, parcialidad y salarios bajos que duplican la media de la población. El informe destaca que el 'código postal' y 'la mochila familiar' pesan más que el esfuerzo, erosionando la clase media y evidenciando un sistema que falla en garantizar derechos básicos, como una vivienda digna.

Ante esta realidad, Bretón le manifestó la necesidad de poner en marcha sistemas integrados de políticas públicas, no parches sectoriales, pues España mantiene unos niveles de desigualdad y de vulnerabilidad significativamente superiores a la media europea. Ello evidencia la persistencia de problemas estructurales profundos y brechas que no se reducirán sin políticas redistributivas más activas.

Es fundamental la protección económica a la infancia y a la juventud para frenar la transmisión intergeneracional de la desigualdad, dado que la exclusión social de las generaciones más jóvenes, las que construirán el futuro del país, no ha dejado de crecer en casi dos décadas. Y para eso es necesario consenso político, pues son políticas de país, no de legislatura, porque la exclusión es evitable. La evidencia demuestra que cuando hay políticas sostenidas, hay resultados.

Si, entre acto y acto electoral, leen este texto los candidatos querría recordarles que, entre 2018 y 2024, en Aragón ha aumentado el número de personas que se encuentran en una situación de exclusión y lo ha hecho en una proporción mayor que en el resto del Estado. La tasa de pobreza infantil es un 26,8 %, el valor más elevado de la serie histórica para este colectivo en Aragón. La vivienda se ha convertido en el principal factor de exclusión, pues un 15 % de la población cae en situación de pobreza severa tras pagar los gastos básicos del hogar.

El informe señala que la legitimidad del Estado de bienestar no puede sostenerse si el sistema político es visto por crecientes sectores de la sociedad, en especial por la juventud, como incapaz de garantizar unas condiciones mínimas de protección y progreso para todos. Por lo tanto, cerrar esa fractura debe ser objetivo prioritario de la actuación de todos los responsables políticos, sea cual sea su ideología.

Termina indicando que, en tiempos de creciente amenaza del populismo ultra, reforzar el consenso en defensa del Estado de bienestar y de las políticas públicas contra la desigualdad es la mejor forma de defender la estabilidad de la propia democracia.